

La consulta plantea si pueden comunicarse al Consulado General de España en Londres la identidad y domicilio de los nacionales (entre 7 y 18 años de edad) residentes en dicha ciudad de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, a los efectos de enviarles información de cursos de lengua y cultura española.

La comunicación planteada constituye desde el prisma de la protección de datos de carácter personal, una cesión de datos definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley indica que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso, según el artículo 11.2 a), cuando la comunicación se encuentre habilitada por una norma con rango de Ley

Por ello, es necesario determinar si el Convenio de Viena de 3 febrero 1970 de relativo a los Consulados, tienen fuerza y valor de ley a los efectos previstos en el artículo 11.2 a) de la LO 15/1999

Pues bien, el Convenio de Viena , forma parte del ordenamiento jurídico Español, pues así lo dispone la Constitución Española, Capítulo Tercero del Título III en la regulación de los Tratados Internacionales artículos 93 al 96. Más concretamente éste último el cual reza lo siguiente “Los tratados internacionales validamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del Ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional”. El Código Civil, en su artículo 1 donde regula las fuentes del derecho, en su apartado 5 establece que “ Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado”

Es por ello que el Convenio de Viena sobre los Consulados forma parte del sistema normativo español, desde el 6 de marzo de 1970 fecha en la que se publicó el instrumento de ratificación con carácter definitivo oficialmente en España.

El Convenio de Viena sobre las relaciones consulares determina en el artículo 5 las funciones consulares señalando que consistirán en:

“a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean persona, naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional

e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas;

g) velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan en el territorio del Estado receptor;

h) velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela;”

El mencionado artículo permite amparar la cesión de los datos, relativos al domicilio e identidad de los interesados, sin necesidad de recabar el consentimiento del interesado, pues dicha cesión se encuentra habilitada en una ley.

En consecuencia, se podrán comunicar al Cónsul los datos por éste requeridos, dado que son necesarios para el ejercicio de las funciones consulares, como señala el artículo antes transcrito tiene por misión para velar por los intereses de los menores nacionales, y uno de esos intereses es conocer la lengua y cultura española.